

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 6 de Marzo de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Puebla, por Antonio Jordán, contra la Jefatura Política de esa Ciudad que lo condenó á la pena de muerte; con cuyos procedimientos en concepto del quejoso, se ha vulnerado en su persona la garantía consignada en el art. 14 de la Constitución Federal, cuya garantía no está suspensa por la citada ley de salteadores.

Visto el informe rendido por la misma Jefatura Política; la copia de las constancias de la causa y la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo pedido; y

Considerando: que si bien aparece de las constancias de autos, que Antonio Jordán no ha comprobado su menor edad, ni la autoridad política procuró investigarla, no obstante las declaraciones del reo y los términos que usaron en las suyas los testigos que declararon en su contra, producen una presunción favorable al mismo reo, la cual, induce á considerarle como menor de edad en cuanto há lugar en derecho, aun cuando pueda estar convicto del delito que se le imputa.

Considerando: que de las enunciadas constancias aparece, que Jordán tiene padre, y que sin previa citación ni audiencia de éste, se ha sentenciado á su hijo á sufrir la pena capital, cuyo procedimiento causa al quejoso un daño irreparable, y le priva del derecho natural común entre padre é hijo, por el que uno á otro debe ser tenido como parte, y contribuir á su mútua defensa en el proceso que se instruya contra alguno de ellos por delito que merezca la pena de muerte; y por último: que deben continuarse las actuaciones formadas, á fin de averiguar la culpabilidad que resulta contra el repetido reo, por el robo con asalto que se asegura cometió á inmediaciones de la ciudad de Puebla.

Por las consideraciones expuestas, y con

fundamento de los art. 101 y 102 de la Constitución Federal y ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, con fecha 9 del año próximo pasado, en que negó el amparo al quejoso, y se declara:

1º Que la Justicia de la Unión, ampara y protege á Antonio Jordán, contra los actos de la Jefatura Política de la expresada ciudad de Puebla.

2º Se consigna al expresado reo al Juez común, para que practique la averiguación que corresponda.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—M. Auza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—Simón Guzmán.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José G. Ramírez.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 30 de 1875.—Enrique Landa, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Roldo Hernández y C^{as}, contra el Administrador de la Aduana terrestre de Mazatlán, que se negó á recibirles en moneda de cobre la cantidad de \$ 237 64 cs. que adeudan por contribución federal.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal ha examinado ya en su primer pedimento, las razones que cree

existen para que en el presente caso no sea procedente el recurso de amparo que se solicita por los Sres. Redo, Hernandez y C^a; pues aunque aparezca de los antecedentes y especialmente del informe del C. Tesorero Municipal que se ha negado este empleado á recibir la moneda de cobre en pago de la Contribucion Federal que se cobra á los quejosos, debe tenerse presente que desde el momento en que la ley de 16 de Diciembre previene que el entero de la Contribucion Federal que establece, debe pagarse precisamente en papel especial, y que á falta de este, puede tambien hacerse en papel de las otras clases de sellos; claro es, que si los causantes se presentan á pagar en dinero, no encontrándose en el caso del art. 5º de la misma ley, tanto ellos al ofrecerlo, como los recaudadores al recibirlo, han infringido la ley, sin que aun pueda alegarse la suprema resolucion que cita el C. Tesorero, porque es bien sabido, que una disposicion administrativa, no puede derogar una ley.

Si los Sres. Redo, Hernandez y C^a, hubieran ofrecido el pago en el papel sellado que previenen en su caso los arts. 2º y 3º de la ley de 16 de Diciembre de 1861, ó hubieran justificado no haber papel de ninguna clase en la Administracion del ramo, entonces si hubieran podido acogerse á la alternativa de pagar en dinero como lo previene el art. 5º; y en la resistencia del Tesorero Municipal á recibirlo en cualquier moneda, bien procedia el recurso de amparo, que tal como se presenta en este caso, es en concepto del fiscal inadmisibile.

Por tanto, así pido al Juzgado, se sirva determinarlo.

Mazatlan, Noviembre 27 de 1874.—*L. Gaona.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Mazatlan, Diciembre 3 de 1874.

Vistos: los Sres. Redo, Hernandez y C^a de este comercio, se han presentado pidiendo

amparo contra el acto del Tesorero Municipal de Mazatlan, por el que se resiste á recibirles en moneda de cobre cuarenta y dos pesos treinta y ocho centavos, en pago de la Contribucion Federal que adeudan sobre varios impuestos municipales, y por el recargo de cinco pesos cincuenta centavos que les hace por no haber satisfecho oportunamente la cantidad anterior en moneda de plata ó oro.

El Tesorero informó, que por no haber papel de la Contribucion Federal y estar autorizado para recaudarla en moneda, cobró en esta especie á los quejosos la cantidad de que se trata, y que como ofreciendo pagarla en la de cobre, que de hecho no circula en el comercio de dos años á esta parte, se negó á recibirla y procedió á requerirlos de pago en moneda de plata ó oro y á embargarlos con arreglo á sus facultades económico-coactivas (fs. 3 y 4.)

El C. Promotor fiscal pide: que no se les ampare, porque con arreglo al art. 5º de la ley de 16 de Diciembre de 1861, solo debe admitirse el pago en moneda cuando falte toda clase de papel sellado en la oficina expendedora, y que la de Mazatlan no está en el caso de ese artículo.

Considerando: que aunque no se ajuste á la ley citada la conducta del Tesorero, de hecho ha exigido en moneda el pago de la Contribucion Federal, y por haberse negado á recibir la de cobre, han entablado el presente juicio.

Que esa moneda ha sido emitida por una oficina federal, cual es la casa de moneda de Culiacan, bajo la garantía de que seria recibida por el valor que se le dió, no solo por los particulares, sino tambien por las autoridades que le dieron curso legal y forzoso; y que de esta garantía se privaria á los tenedores de ella, sin previa indemnizacion excluyéndola del pago de los impuestos que recauden las oficinas: que del hecho de no circular en el comercio, no se puede inferir la falta de obligacion de recibirla, mientras la ley no lo disponga.

Considerando: que desde el momento que ofrecieron los Sres. Rodo, Hernandez y C^a, hacer el pago en moneda de cobre, dejó de proceder el ejercicio de la facultad económico-conectiva, y los recargos que le son consiguientes, porque el derecho de la hacienda pública para exigirlos en plata ú oro con exclusion de la de cobre, no es claro é indudable, como lo requiere el art. 2º de la ley de 20 de Enero de 1867.

Con los fundamentos indicados y el que prestan los arts. 27 y 101, frac. 1º de la Constitucion, é igual fracción del 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve:

Primero. Que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Rodo, Hernandez y C^a, contra el acto del Tesorero Municipal de esta poblacion, por el que se niega á recibirlos en moneda de cobre cuarenta y dos pesos treinta y ocho centavos, en pago de la Contribucion Federal que causaron por varios impuestos municipales.

Segundo. Que los ampara igualmente contra el cobro que les hace el mismo Tesorero de cinco pesos cincuenta centavos, por morosidad en el pago de la cantidad anterior á títulos de recargos ó multas.

Tercero. Hágase saber: remítanse las copias respectivas al *Semanario Judicial* y al periódico de esta Ciudad, y los autos originales, á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales.

El suplente 2º del Juzgado de Distrito de Sinaloa, en ejercicio, O. Lic. Joaquín García, así lo proveyó y firmó. Doy fé.—*Joaquín García*.—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia. Mazatlan, Diciembre 15 de 1874.—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 6 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Sina-

loa, por los Sres. Rodo, Hernandez y C^a, contra la determinacion del Administrador de la Aduana Terrestre de Mazatlan, por la que se niega á recibirlos en moneda de cobre la cantidad de doscientos treinta y siete pesos sesenta y cuatro centavos que adeudan por Contribucion Federal sobre diversos impuestos del expresado Estado, alegando los promoventes, que con tal determinacion, se vulnera en su persona, la garantia consignada en el art. 27 de la Constitucion Federal.

Vistos los escritos de los quejosos; el pedimento fiscal y la sentencia del Juez de Distrito que les concedió el amparo por haber justificado los mismos quejosos, la procedencia legal del presente recurso; de conformidad con la Constitucion Federal y ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios y legales fundamentos, la sentencia pronunciada en Mazatlan á 24 de Noviembre del año próximo pasado, por el juez de Distrito de Sinaloa: declarándose, que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Rodo, Hernandez y C^a, contra el acto del Administrador de la Aduana Terrestre de dicho Puerto, por el que se niega á recibirlos en moneda de cobre el pago de doscientos treinta y siete pesos sesenta y cuatro centavos que deben por Contribucion Federal.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de ésta sentencia para los fines consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron:—*José María Iglesias*.—*M. Auza*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*S. Guzman*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 22 de 1875.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por D. Ramon Alvarez Nieto, contra una resolucion del Tribunal Superior del Estado, por violacion de garantias.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito:

El Fiscal dice: A las razones aducidas en su pedimento de 30 de Noviembre último, pasa á exponer algunas otras consideraciones que robustecen la opinion consignada en él.

Acusado el Juez de 1ª instancia, accidental, Mateo Olan, ante la 2ª Sala del Tribunal Superior, á quien tocó en turno, ésta se vió en el caso de decidir á qué actuaciones se debía estar, en el juicio verbal seguido entre los Sres. Alvarez y Gutierrez, sobre la desocupacion de una casa; es decir, si á las practicadas hasta el 22 de Diciembre de 1873, ó á las posteriores. La Sala, con vista del juicio original respectivo, compulsas libradas y lo alegado por las partes, formuló su sentencia declarando la responsabilidad del acusado, la pena á que se habia hecho acreedor, y revocó sus procedimientos; dejando como consecuencia forzosa, en toda su fuerza, los efectos de las sentencias anteriores, que dirimieron los puntos controvertidos. Esa sentencia ha sido confirmada en todas sus partes por la otra Sala.

Este Ministerio cree, que no puede negarse la competencia del Tribunal Superior, para conocer de los delitos, faltas y abusos de sus inferiores, por ser una facultad que las leyes relativas le han acordado siempre. Es un hecho tambien, que al juez

acusado se le aplicó la ley vigente en el Estado, de 24 de Marzo de 1813; resultando de estos dos conceptos, que no ha habido violacion del art. 14 y menos del 16 de la Constitucion, que invoca el quejoso.

Es cierto que esos fallos afectan profundamente providencias que eran favorables á éste, y que fueron declaradas sin valor alguno. Mas precisamente este era el objeto y fin del juicio de responsabilidad instaurado contra el juez que las dictó, y que no podian subsistir por estar en abierta pugna con decisiones dadas con anterioridad sobre los mismos puntos. Así lo establece el art. 8º de la ley citada de 24 de Marzo, y no es cierto que las salas hayan mandado abrir nuevo juicio, pues por el contrario, decretaron la cesacion é ineficacia del procedimiento del juez acusado.

Y bien: ¿la justicia federal podrá meter la mano en los procedimientos de los jueces superiores y en los del Tribunal superior, que han entendido en aquellos juicios? Evidentemente no; pues segun el art. 117 de la Constitucion, las facultades que no estén expresamente concedidas por ella á los funcionarios federales, se entienden reservadas á los Estados, y entre ellas no está la de revisar los actos y decisiones de los tribunales de éstos, mientras no violen algun precepto constitutivo.

La concesion del amparo produciria consecuencias terribles en el presente caso. Ella nulificaria las sentencias tantas veces mencionadas, de 25 de Julio y 22 de Diciembre de 1873, dictadas en el curso de un procedimiento-legal: legalizaria el proceder del juez D. Mateo Olan: vulneraria en lo mas esencial las resoluciones de las Salas del tribunal superior de justicia del Estado, y lo que seria mas funesto, entrañaria la ruina de D. Pedro Gutierrez Vargas, que no es parte en este juicio; pues de seguro el sucesor de aquel, abrirá la ejecucion pendiente, y concluirá por rematar la finca embargada. Con tales fundamentos, esta fiscalia pide á vd., determine conforme tiene solici-